



Número 155 - Junio 2010

NUESTRA OPINIÓN

- África: la Copa del Mundo y la realidad

COMUNIDADES Y BOSQUES

- Brasil: la reserva Juma, un ensayo piloto de REDD en la Amazonía
- Bolivia: hidroeléctricas del Río Madera denunciadas ante el Tribunal Permanente de los Pueblos
- Posco: malo para India, malo para Uruguay y malo para el clima
- Papua Nueva Guinea: pueblos indígenas pierden sus derechos frente a inversores

COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES

- El grupo francés Bolloré intenta intimidar a los medios que informan sobre prácticas abusivas en sus plantaciones camerunesas
- Camerún: refutando diez mentiras sobre las plantaciones de Socapalm
- Uruguay: nueva oportunidad para el necesario debate sobre el modelo foresto-celulósico
- Chile: ingenieros forestales denuncian impactos de empresa certificada por CERTFOR y por FSC

EUROPA GLOBAL Y TRATADOS DE "LIBRE" COMERCIO

- Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea en América Latina: un camino a la pérdida de soberanía y territorios

COMERCIO DE CARBONO

- ¿Para qué sirve el comercio de carbono?

NUESTRA OPINIÓN

- África: la Copa del Mundo y la realidad

Cada cuatro años, millones de personas del mundo entero se vuelven repentinamente fanáticas del fútbol. Muchos de nosotros sabemos que el organizador del mundial – la FIFA - es una enorme y corrupta máquina de hacer dinero. También sabemos que el fútbol es un gran negocio para muchas y muy destructivas empresas transnacionales. Incluso sabemos que, en muchos casos, los jugadores de fútbol no son más que gladiadores modernos, vendidos como mercancía humana en el mercado de la FIFA.

A pesar de esto, la magia del fútbol nos mantiene pegados al televisor. A la belleza del juego y al arte desplegado por algunos jugadores se agrega una cualidad poco frecuente en el mundo de hoy: la igualdad. Sin importar el poder político y económico del país que representan, 11 jóvenes compiten en igualdad de condiciones con otros 11 jóvenes. Dentro de los equipos, la colaboración entre los jugadores y con el técnico es esencial. Las reglas del juego son las mismas para ambos equipos y los árbitros son habitualmente neutrales en su aplicación.

Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo se lleva a cabo en África, lo cual es una buena oportunidad para comparar el fútbol con la realidad de este continente.

Hablar de igualdad en las relaciones entre África y los poderes económicos del mundo es un mal chiste. Las reglas son impuestas por el árbitro (el Sr. Banco Mundial, el Sr. FMI, el Sr. OMC y otros señores) para ayudar a los jugadores empresariales a ganar el partido. Los técnicos africanos – los gobiernos – han sido sobornados por los oponentes, de modo que la colaboración dentro de los equipos se vuelve imposible. En el campo contrario, los directores empresariales – los gobiernos del Norte – imponen cambios en las reglas cada vez que sus equipos lo necesitan. El juego limpio no existe. El resultado del partido se conoce con mucha anticipación: las empresas transnacionales vencen fácilmente a África.

Contrariamente a lo que sucede en el fútbol, donde los perdedores simplemente se sienten mal por un tiempo, el escenario Empresas-África está lleno de verdadero sufrimiento humano: hambre, muerte, violencia, desposesión, desamparo, destrucción ambiental. Las riquezas del continente – bosques, minerales, petróleo – enriquecen a los ya adinerados mientras empujan a los africanos hacia la pobreza absoluta. El “juego” no es para nada un juego: es una tragedia.

Sin embargo, poco o nada de esto es informado por los miles de periodistas presentes en Sudáfrica para cubrir la Copa del Mundo. Tanto el país anfitrión como el resto del continente parecen estar llenos de gente feliz, vestida con ropa colorida y tocando la vuvuzela, preocupada solamente por el triunfo o el fracaso de su equipo en el hermoso juego.

Pero la verdadera África, sufriente y explotada, es en realidad muy visible para quien quiera verla.

Y también lo son las muchas comunidades, organizaciones y movimientos que luchan contra viento y marea en el injusto partido que se juega contra el continente. Se los mantuvo bien alejados de la cobertura periodística de la Copa del Mundo pero, afortunadamente para el futuro de África, aún están allí, haciéndose cada vez más fuertes. ¡Nuestro apoyo para ellos!

[inicio](#)

COMUNIDADES Y BOSQUES

- Brasil: la reserva Juma, un ensayo piloto de REDD en la Amazonía

Por ahora la iniciativa llamada Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD) es más bien un conjunto de propuestas y algunos proyectos piloto. Sin embargo, está siendo impulsada con mucha fuerza y premura tanto dentro como fuera del proceso de Naciones Unidas, con el objetivo de incluir el carbono de los bosques en la serie de mecanismos ideados para el otorgamiento de permisos de carbono y compensaciones de carbono.

En los últimos dos años han proliferado propuestas y planes nacionales de proyectos REDD, con la participación de gobiernos, organismos multilaterales, grandes ONGs y empresas. El Banco Mundial y gobiernos del norte, entre ellos Noruega, Australia y Gran Bretaña, han creado un gran fondo de unos 800 millones de dólares para financiar proyectos REDD.

En Brasil, la Reserva de Desarrollo Sustentable de Juma, en la esquina sudoriental del estado de Amazonas, municipalidad de Novo Aripuanã, es el primer proyecto brasileño aplicado en materia de REDD y ha recibido en el país la validación de los Estándares CCBS de Clima, Comunidad y Biodiversidad, establecidos por la empresa auditora alemana Tüv Süd.

El caso piloto REDD de la Reserva de Desarrollo Sustentable de Juma abarca una superficie de bosque de 589.612 hectáreas y anuncia que evitará la degradación de unas 366.151 hectáreas de la superficie total del bosque tropical así como la emisión de 210.885.604 millones de toneladas de CO₂ a la atmósfera para 2050. El proyecto promete pagar a las familias locales un monto de dinero por conservar intacto el bosque.

El dinero para el proyecto proviene de la ONG brasileña Fundación Amazonas Sustentable (FAS), que administra la reserva con fondos donados por el gobierno provincial, el banco brasileño privado Bradesco y la gran cadena hotelera multinacional Marriot International. El hotel invita a sus huéspedes en todo el mundo a donar 1 dólar por noche al fondo Juma como forma de compensar voluntariamente las emisiones que se calcula se gastan diariamente de manera individual por la estadía en el hotel. En la página web del hotel se lee: "Diez dólares compensarán el carbono de sus diez noches en hoteles Marriott y los contribuyentes estadounidenses pueden deducirlos de sus impuestos" (1).

Otra fuente financiera para el proyecto Juma es la posible venta de créditos de carbono por las emisiones de CO2 evitadas al no deforestar la reserva, comercializadas en el mercado voluntario de carbono para compensar emisiones, que según el proyecto (2) está siendo desarrollado en sociedad con Marriott International. Para una gran empresa como el Grupo de Hoteles Marriott, el proyecto puede resultar muy útil como práctica de "maquillaje verde".

El proyecto Juma aduce que beneficia a las comunidades locales con un estipendio pagado directamente a través del programa "Bolsa Floresta" – una asignación para las 339 familias que viven en 35 comunidades en la zona, quienes serán remuneradas por proteger la selva recibiendo unos 28 dólares mensuales que se les transfiere a una tarjeta de débito a nombre de la esposa.

Cada cabeza de familia debe firmar un contrato que la obliga a no cortar ni quemar los árboles, lo cual será supervisado por inspecciones periódicas. En caso de deforestación, el gobierno suspenderá la asignación.

La organización Center for Investigative Reporting Frontline quiso ver con sus propios ojos este proyecto, presentado en todo el mundo como un modelo para detener la deforestación tropical. De manera que realizaron un recorrido de campo, el cual fue llevado a cabo por Mark Schapiro (3), quien encontró que residentes como Dalvina Almeida deben andar dos días en bote para recibir sus 28 dólares mensuales. El informe cita testimonios del esposo de Dalvina: "Antes solíamos plantar mucho. Cuando esto se convirtió en una reserva nos dijeron que ya no podíamos plantar más en la selva. Todos firmamos para Bolsa Floresta. Pero Bolsa Floresta no pude mantener a mi familia".

La asignación de 28 dólares al mes representa 0,93 dólares diarios. Para una familia rural promedio de cómo mínimo 5 personas, el ingreso per cápita cae a 0,18 dólares por día. Sería bueno informar a los administradores y financiadores del Proyecto Juma que este magro pago está muy por debajo de la línea de pobreza, estimada por el Banco Mundial en un ingreso menor a 1,25 dólares diarios por persona. Esta paga ínfima se transforma en escandalosa si se la compara con lo que sería el salario mensual del director de la fundación del Proyecto Juma: 25.000 dólares mensuales.

Además, es importante subrayar que las comunidades locales que hasta ahora obtuvieron sus medios de vida del bosque, perderán la mayor parte de esos recursos como resultado de la reserva de Juma.

Schapiro comenta en su informe que "algunas familias rurales perdieron gran parte de sus ingresos cuando se les exigió que trasladaran sus plantaciones de alimentos de bosque primario a secundario, y el estipendio de unos 25 dólares de 'Bolsa Floresta' no ha compensado de manera significativa la pérdida".

Lo que empeora aún más las cosas es que la preservación de este bosque permitirá a los contaminadores seguir emitiendo carbono vinculado a combustibles fósiles. Esto significa que la inclusión del bosque de Juma en el comercio de emisiones en realidad contribuirá al cambio

climático, porque permitirá a las empresas y países ricos contaminadores aducir que están "compensando" sus emisiones de carbono en la medida que conservan un pedazo de bosque en Brasil. Si no fuera porque el Banco Mundial apoya fervientemente el comercio de emisiones, sus economistas definirían el proyecto Juma como una "situación pierde-pierde" – para el clima y la gente. Pero, por supuesto, no lo harán.

(1) <https://www.marriott.com/green-brazilian-rainforest.mi>

(2) "The Juma Sustainable Development Reserve Project: Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation in the State of Amazonas, Brazil," Project Design Document for validation at "Climate, Community & Biodiversity Alliance (CCBA)," 29/09/2008, http://unfccc.int/files/methods_science/redd/application/pdf/pdd_juma_reserve_red_project_v5.0.pdf

(3) "The Carbon Hunters," Carbon Watch, informe de Mark Schapiro, producido por Andres Cediel, <http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/carbonwatch/2010/05/the-carbon-hunters.html>

inicio

- Bolivia: hidroeléctricas del Río Madera denunciadas ante el Tribunal Permanente de los Pueblos

El 14 y 15 de mayo pasados se celebró en Madrid, España, la III Sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos, una actividad impulsada por la Red Birregional Europa-América Latina y el Caribe "Enlazando Alternativas".

La red, creada en 2004, es una respuesta a las medidas neoliberales de la política comercial de la Unión Europea (UE) en su búsqueda por asegurar el mayor acceso posible de sus transnacionales a los mercados latinoamericanos y caribeños. La red, además, va en apoyo de las resistencias populares latinoamericanas y europeas ante el avance de la expansión comercial europea.

Por su parte, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), cuya constitución data de 1979, procura calificar en términos jurídicos y hacer visibles situaciones de violación masiva de los derechos humanos y de los pueblos que no encuentren reconocimiento ni respuesta en las instancias oficiales. El TPP está integrado por un amplio número de miembros nombrados por la Fundación Lelio Basso por el Derecho y la Liberación de los Pueblos. Sus objetivos centrales son, por una parte, denunciar públicamente los crímenes cometidos por las empresas transnacionales y los impactos de sus actividades sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y por otra parte hacer visible la corresponsabilidad de la UE al respecto, dado que sus instituciones y sus políticas favorecen el aumento del poder de las compañías multinacionales.

En el marco de las Cumbres de los Pueblos - cumbres alternativas a las oficiales de la UE y gobiernos de la región - la red Enlazando Alternativas y el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) han realizado sesiones del tribunal sobre "Políticas Neoliberales y Transnacionales Europeas en América Latina y el Caribe". Allí se expusieron violaciones a los derechos humanos, laborales y ambientales cometidas por más de 25 empresas transnacionales con base en la Unión Europea y sus subsidiarias en toda América Latina y el Caribe.

En la III Sesión del TPP, las organizaciones Movimiento de Afectados por las Represas en Brasil (MAB), el Foro Boliviano de Medioambiente y Desarrollo (FOBOMADE) y el SETEM-Catalunya de España demandaron a las empresas GDF-SUEZ (Francia), Santander (España) y Banif (Portugal), y a los organismos internacionales que las apoyan, entre ellos el FMI, el Banco Mundial y la Comunidad Europea, por la construcción de las usinas de San Antonio y Jirau en Porto Velho, capital de Rondonia, Brasil, a 10 kilómetros de la frontera con Bolivia, sobre el río Madera, el segundo mayor río de la Amazonía, que cubre cerca de un cuarto de la Amazonía brasilera y llega a los territorios boliviano y peruano.

El Gobierno de Brasil concedió unilateralmente el permiso ambiental para la construcción de las dos represas en territorio brasileño, sin consultar a Bolivia acerca de los impactos que tendría en este país y negándose a realizar estudios de impacto ambiental en Bolivia.

La demanda señala que las usinas son parte de un complejo hidroeléctrico que a su vez integra los programas de interconexión de infraestructura de la Iniciativa Regional de Integración de Infraestructura Sudamericana (IIRSA).

El IIRSA es un plan que, patrocinado entre otros organismos por el BID, procura mediante la construcción de infraestructura de transporte terrestre, aéreo y fluvial; de oleoductos, gasoductos, hidrovías, puertos marítimos y fluviales y tendidos eléctricos y de fibra óptica en países de América del Sur, optimizar la eficiencia de los flujos internacionales de comercio y de exportación de las empresas transnacionales, mejorando principalmente la conexión con los mercados de América del Norte y Europa.

Según información de Fobomade (1) la construcción de la usina San Antonio, que comenzó en agosto de 2008, es una inversión del Consorcio Santo Antonio Energia, que es parte del consorcio Eletrobrás-Furnas (39%). El Banco Santander posee 10% de acciones, al igual que el Banco Banif; CEMIG, el 10%; Odebrecht, 18,6% y Andrade Gutierrez, el 12,4%.

La usina Jirau, iniciada en noviembre de 2008, pertenece al Consorcio Energia Sustentável de Brasil (parte de GDF-Suez con 50,1%), Eletrosul Centrais Elétricas SA. (20%), la Companhia HidroElétrica do Sao Francisco - Chesf (20%), y Camargo Correa Investimentos em Infra-Estrutura SA (9,9%).

El Banco de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) es el principal financiador del Complejo Madera, pero también intervienen de manera indirecta el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Las organizaciones sociales denunciaron ante el TPP que las represas brasileñas de Jirau y San Antonio, en avanzado estado de ejecución, ya provocan severos impactos y se prevé que provocarán más, entre los que se cuentan la expulsión de pueblos indígenas y campesinos de terrenos con procesos de titulación consolidados; la inundación de extensas áreas de cultivo y zonas de recolección de la castaña, fruto base de la economía de indígenas y campesinos amazónicos del departamento de Pando y cuyas condiciones de vida dependen enteramente de que el bosque se mantenga intacto; impacto en la flora y fauna nativa, pérdida de la riqueza ictícola, interrupción del tránsito natural de peces y delfines de río - especie endémica de los municipios de Pando y Beni - ; menor velocidad de las aguas lo que lleva a una menor oxigenación y aumento de temperatura; contaminación de las aguas con mercurio; aumento de la malaria, fiebre amarilla, dengue y leishmaniasis como consecuencia de la multiplicación de vectores de transmisión por el aumento de la inmigración de trabajadores temporales, cambios en la calidad del agua y la ampliación de cuerpos de agua estancados.

Otro reciente estudio (2) concluye que la construcción de la represa de San Antonio provocará una deforestación masiva, por las obras en sí y por la construcción de carreteras y ductos relacionados; la muerte de por lo menos 11 toneladas de peces (algunas fuentes mencionan 60 toneladas) y otros animales como consecuencia de las explosiones diarias utilizadas en las obras; contaminación de agua y ruptura de la estructura social de comunidades indígenas.

El estudio identifica que "uno de los impactos directos y más temidos de la construcción de las represas en un área relativamente plana como la Amazonía es el riesgo de inundaciones y sus consecuencias de la disminución de la productividad de los suelos agrícolas, daños a la biodiversidad, contaminación del agua subterránea, y las consecuencias humanas (muertos, enfermedades, pérdidas económicas, pérdidas de viviendas)."

Es por todo esto que en la III sesión del TPP en Madrid, Fobomade, MAB y SETEM-Catalunya solicitaron al Tribunal:

"1. Poner freno a las violaciones de los derechos humanos y abusos de las transnacionales y exigir resarcimientos.

Esto supone diseñar una nueva jurisprudencia internacional vinculante en el marco de Naciones Unidas que tipifique crímenes ambientales e imponga sanciones civiles, administrativas y penales aplicando la regla: "A mayor potencial de destrucción y mayor riesgo para la preservación del ambiente, mayor debe ser la responsabilidad".

2. NO al doble estándar, NO a la doble moral.

Que el Tribunal inste a gobiernos e instituciones comunitarias a la creación de estándares intergubernamentales globales sobre empresas y derechos humanos. Se requiere un marco vinculante y obligatorio para establecer mecanismos efectivos de reclamo y responsabilización.

3. Que denuncien y enjuicien los crímenes económicos y el ecocidio.

Demandamos enjuiciar las políticas comerciales de la UE y de sus Estados y la arquitectura institucional que legitima la obtención ilegítima de beneficios de transnacionales europeas.

La Unión Europea debe ser imputada por crímenes de lesa humanidad tipificados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Demandamos a la UE por ecocidio, definida por el Estado de Chiapas como "conducta dolosa consistente en causar un daño grave al ambiente, por la emisión de contaminantes, la realización de actividades riesgosas o la afectación de recursos naturales".

El informe de Henkjan Laats señala además que la generación de energía mediante el agua en represas es considerada como una fuente de energía renovable en la medida que después de la construcción de una represa no emite niveles significativos de gases de efecto invernadero. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los niveles de CO2 se mantienen altos y además hay un aumento de la emisión de gas metano, especialmente por las turbinas y los vertederos. El gas metano tiene 25 veces más impacto sobre el calentamiento global por tonelada que el dióxido de carbono. Asimismo, se estima que la deforestación, los incendios, el aumento de ganadería, y la construcción de carreteras hacen que la electricidad de las represas hidroeléctricas amazónicas no sea una "energía limpia".

En definitiva, las represas hidroeléctricas contribuyen al calentamiento global. Otra forma de ecocidio.

(1) "Caso de las hidroeléctricas en el río Madera presentado ante el TPP en Madrid", Servicio de Noticias Ambientales, <http://fobomade.org.bo/bsena/?p=479>

(2) "El Dilema Amazónico; 'la construcción de Mega-represas en el Río Madera'", Henkjan Laats, CEADDESC y PEC, Bolivia 2010, <http://www.riomadeiravivo.org/docs/dilamazonico.pdf>

[inicio](#)

- Posco: malo para India, malo para Uruguay y malo para el clima

Como informáramos en octubre del 2009, tanto en la India como en Uruguay a la empresa siderúrgica coreana POSCO se le ha brindado la posibilidad de ocupar territorio preciado para los pobladores de ambos países.

En la India, se le otorgaron a la empresa Posco permisos para instalar una planta siderúrgica y un puerto y realizar prospecciones mineras en el estado oriental de Orissa en una zona que comprende 6000 hectáreas de bosques prístinos, excelente tierra agrícola y parte de la costa. El gobierno uruguayo por su parte, firmó un Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones con el gobierno de Corea mediante el cual se le garantiza todo tipo de apoyo a la empresa coreana POSCO para concretar un "Proyecto Forestal de Secuestro de Carbono" (Ver detalles en artículo publicado en Boletín WRM 147: <http://www.wrm.org.uy/boletin/147/Posco.html>)

Si el proyecto no se ha llevado a cabo todavía en la India, es por la resistencia masiva que desde el año 2005 llevan adelante los miles de pobladores que dependen para su supervivencia de los bosques, la tierra agrícola y la costa que la empresa tiene planes de destruir para realizar sus negocios. De acuerdo a noticias recientes, debido a la falta de respuesta por parte del gobierno y en protesta a lo que los locales denominan la conspiración conjunta del gobierno central de Delhi, el gobierno estatal y el presidente de Corea del Sur, los pobladores decidieron continuar con la "Sentada", (*Dharna en idioma local*) una protesta pacífica que comenzó el 26 de enero de 2010 (coincidente con los festejos del día de la República de la India que tuvo como jefe máximo invitado al Presidente de Corea) Ya habían pasado 107 días y noches durante los cuales mujeres, hombres, niños y niñas de familias campesinas y pescadores permanecían sentados, cuando decidieron hacer un llamado a la solidaridad nacional e internacional en la medida que no lograban crear el más mínimo sentido de responsabilidad con el pueblo de parte del gobierno que supuestamente los representa.

En un esfuerzo desesperado por cumplir con la promesa hecha a la empresa de que "aceleraría los trabajos para entregarle las tierras", el pasado 11 de mayo el gobierno envió 25 pelotones militares fuertemente armados que rodearon la zona donde los pobladores realizaban la sentada, ocuparon las escuelas y se prepararon para reprimir... a la población local desarmada. En este contexto el movimiento anti-POSCO hizo un nuevo llamado urgente a participar en la Semana de la Resistencia Masiva en solidaridad con los luchadores locales contra el gigante POSCO y la brutalidad del estado.

"En ningún momento de su lucha por más de cinco años, el movimiento anti-POSCO llevó a cabo actividades violentas y ha sido en cambio un ejemplo para el resto del país sobre cómo realizar una lucha democrática, basada únicamente en el apoyo masivo de hombres y mujeres comunes" aclara el comunicado emitido por el movimiento. A pesar de este hecho, el 15 de mayo, la policía de Orissa abrió fuego sobre manifestantes pacíficos que se mantuvieron en defensa de sus tierras y medios de subsistencia. Este acto del Estado fue condenado por varias organizaciones de derechos humanos y civiles en todo el país y el mundo. Grupos por los derechos de los bosques tales como el Foro Nacional de Pueblos de los Bosques y Trabajadores Forestales (NFFPFW) y la Campaña por la Supervivencia y la Dignidad (CDS) condenó esta brutalidad atroz y el desesperado intento de corporativizar los recursos forestales, en la que más de 50 personas fueron gravemente heridas y muchas tiendas y casas fueron incendiadas por los policías sedientos de sangre. A pesar de toda la violencia desatada contra ellos, y las balas que permanecen en sus cuerpos, la gente de la zona continúa la protesta contra la adquisición de tierra para la planta de acero y su puerto. Todavía están allí porque luchan por el derecho a vivir con libertad y dignidad. También porque esto no es sólo una controversia "sobre la adquisición de tierras para el desarrollo" como ha manifestado el gobierno, sino porque el proyecto POSCO es ilegal y no traerá ningún beneficio para la población local. Es ilegal porque viola los derechos consagrados en la Ley de Bosques del 2006. Según esa ley, las tierras boscosas no se pueden dar a nadie hasta que 1) todos los derechos de la gente sean reconocidos y 2) la gente dé consentimiento al proyecto. El gobierno central y el estatal no tienen derecho legal a entregar la tierra a POSCO. Legalmente, esto es un robo de los recursos naturales del país por parte de una multinacional. Lo que no se suele mencionar tampoco es que POSCO está consiguiendo una gran cantidad de tierra, agua y millones de toneladas de mineral de hierro, a cambio de no pagar

prácticamente nada y va a desplazar a alrededor de 40.000 personas. Esto es lo que el gobierno de la India considera "desarrollo".

El 22 de junio, vencía el Memorando de Entendimiento (MdE) entre POSCO y el gobierno de Orissa, exactamente cinco años después de haber sido firmado. Este MdE, que básicamente restringe el papel del gobierno al de un mero "facilitador" para el proyecto y una agencia para la adquisición de tierras, es muy poco ético y no debería haber sido firmado en primer lugar. Cinco años más tarde, habiendo sido testigos de la brutal represión del estado a la oposición local a este proyecto, y dado que el estado ha hecho caso omiso de sus propias leyes y políticas relativas a los derechos de los bosques y la protección del medio ambiente, la población local demanda que el MdE no sea renovado y solicita se firme la petición disponible (en inglés) en: <http://www.petitiononline.com/p210610/petition-sign.html>

Esa misma empresa también desembarcó en Uruguay con un proyecto de "desarrollo limpio", que implicará la plantación de monocultivos de árboles destinados a "compensar" emisiones de dióxido de carbono en el marco del (mal) llamado "Mecanismo de Desarrollo Limpio" (MDL) de la Convención sobre Cambio Climático de Naciones Unidas. Como no podía faltar, la empresa asegura que su proyecto significará "una contribución significativa al desarrollo sustentable de Uruguay".

Lo más triste es que el gobierno uruguayo acaba de dar luz verde al proyecto de la empresa POSCO, a pesar de la larga trayectoria de oposición a los monocultivos de árboles en este país y a la gran cantidad de información documentada disponible en relación a sus impactos sociales y ambientales. Para tal decisión no se ha tomado tampoco en cuenta el documento presentado por la Red de ONGs Ambientalistas y la Asociación Uruguaya de ONGs al Comité Asesor del MDL en Uruguay, en el que se contrarrestan uno a uno los argumentos usados por la empresa para justificar el supuesto desarrollo asociado a su proyecto. Las organizaciones entienden "que el proyecto no contribuye al desarrollo sustentable de Uruguay y no recomienda su aprobación". (Ver texto completo de este documento en: http://www.wrm.org.uy/paises/Uruguay/Comentarios_Proyecto_Posco.pdf)

Pero lo más grave es que el gobierno de Uruguay no ha tomado en cuenta el nivel de conflictividad y represión que la presencia de POSCO ha causado en la India durante estos 5 últimos años, que muestra a las claras el verdadero carácter de esta empresa, que ahora pretende apropiarse de tierras en Uruguay bajo el disfraz del "desarrollo limpio".

No respetar el derecho de los pueblos sobre sus tierras y bosques en la India, no tomar en cuenta los impactos sociales y ambientales ya constatados que producen los monocultivos de árboles en Uruguay no es bueno para ninguno de los dos países y menos que menos para el clima.

Artículo elaborado con información proporcionada por: Mamata Dash, correo electrónico: mamata68@gmail.com

[inicio](#)

- Papua Nueva Guinea: pueblos indígenas pierden sus derechos frente a inversores

Estamos presenciando un proceso mundial de expansión del agronegocio y apropiación de tierras en el sur. A través del arrendamiento, la concesión, incluso la compra, empresas y estados se apoderan de grandes superficies de tierras agrícolas en condiciones de largo plazo, para producir alimentos básicos o agrocombustibles con destino a la exportación. Se estima que aproximadamente 1.000 grupos inversores se han instalado en más de 50 países de Asia, Oceanía, África y América Latina (1).

Para que eso sea posible se necesita que se movilicen grandes cantidades de dinero, se firmen acuerdos comerciales y se introduzcan cambios en los sistemas jurídicos, para crear así la infraestructura que permitirá la apropiación privada de la tierra, que en muchos países del sur sigue siendo manejada por las comunidades con sus sistemas tradicionales.

En este contexto, IRIN informó (2) que el 28 de mayo, el parlamento de Papua Nueva Guinea enmendó secciones de la Ley 2000 de Medio Ambiente y Conservación, que regula los principales proyectos vinculados a recursos del país. Las enmiendas conceden al director de la Oficina de Medio Ambiente y Conservación amplio poder para autorizar los planes ambientales presentados por inversionistas. La autoridad otorgada es tan amplia que la decisión final del director "no puede ser impugnada o revisada en ninguna corte o tribunal, salvo a instancias de un Instrumento de Autorización".

La enmienda tiene muchas consecuencias para los derechos a la tierra y a la protección ambiental de seis millones de personas. Durante muchos años, los habitantes de Papua Nueva Guinea podían individualmente o conforme a derechos consuetudinarios, proteger su tierra mediante juicio o reclamación de compensación en caso de deterioro ambiental. Ahora, con las enmiendas, perdieron esos derechos.

Los grupos indígenas de Papua Nueva Guinea han luchado largamente por su tierra y sus derechos ambientales. En 1997, 1998 y 1999, hubo fuertes enfrentamientos a las actividades mineras de las empresas Freeport-Rio Tinto en Bougainville y OkTedi (ver Boletín N° 7 del WRM). IRIN informa que en ese entonces más de 5.000 personas perdieron la vida.

Además de la minería, las actividades de maderero destruyeron o degradaron los bosques con impactos muy perjudiciales en los habitantes de los bosques. Y más recientemente, otra presión se agregó a los bosques y su gente: las plantaciones a gran escala de palma aceitera, promovidas por préstamos del Banco Mundial, que han aumentado en un país donde el 97 por ciento de la tierra es de propiedad comunal y la mayoría de su población de 6 millones sigue viviendo en zonas rurales y depende de la agricultura de subsistencia como forma de sustento (ver Boletín N° 40 del WRM).

En este contexto, las nuevas enmiendas que le quitan a la gente local los derechos a proteger su tierra parecen muy convenientes para las empresas en su búsqueda de nuevos territorios.

Sabemos el alto costo que esto tiene: mayor pobreza por la destrucción de los medios de sustento, concentración de la tierra y desplazamiento, pérdida de soberanía alimentaria para las comunidades locales, más emisiones de carbono tanto por la deforestación como por el agronegocio industrial. Ése es el alto precio de la arquitectura comercial mundial. ¿Quién rendirá cuentas por la destrucción?

(1) "Land grabbing and the global food crisis," GRAIN, November 2009, http://www.grain.org/o_files/landgrabbing-presentation-11-2009.pdf

(2) "PAPUA NEW GUINEA: Indigenous people lose out on land rights," IRIN, <http://www.irinnews.org/PrintReport.aspx?ReportId=89322>

[inicio](#)

COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES

– El grupo francés Bolloré intenta intimidar a los medios que informan sobre prácticas abusivas en sus plantaciones camerunesas

Los medios en la mira

El 6 de mayo último, el periodista Benoît Collombat y dos responsables de Radio France fueron condenados por difamación contra el grupo del empresario francés Vincent Bolloré. El reportaje por el cual fueron incriminados daba la palabra a la sociedad civil camerunesa sobre las prácticas de la empresa en los sectores ferroviario, portuario y de plantaciones, todos ellos privatizados en provecho de filiales del grupo Bolloré. Ante las acusaciones de explotación de los trabajadores, de colusión con el régimen, de deforestación y de contaminación, ningún responsable del grupo se mostró dispuesto a hacer declaraciones a tiempo para que éstas fueran incluidas en el reportaje. El tribunal condenó a los acusados a pagar una multa de 1000 euros más uno por daños y perjuicios, especificando sin embargo que la decisión se refería a los aspectos ferroviario y portuario pero no al manejo de las plantaciones.

El 2 de julio próximo, le habría tocado a la fotógrafa independiente Isabelle Alexandra Ricq el turno de ser juzgada por difamación. Vincent Bolloré había presentado una denuncia contra ella y dos responsables de Radio France luego de una entrevista de France Inter, en la cual ella expuso los problemas que había podido constatar en las plantaciones de palma aceitera de Socapalm y en sus inmediaciones mientras realizaba un reportaje gráfico (publicado en *Le Monde Diplomatique* y en *Alternatives internationales*, <http://www.isabellericq.fr/socapalm.html>). Invitada por Radio France a narrar su experiencia, describió las malas condiciones de vida de los pigmeos

Bagyeli, los problemas vinculados con la deforestación y la falta de tierras, y la situación deplorable de los trabajadores que, según comentó, “se denominan a sí mismos esclavos de Socapalm”. Sin embargo, dos semanas antes de la audiencia Bolloré prefirió retirar la denuncia, probablemente por considerar que tenía pocas posibilidades de salir victorioso y que se exponía al grave riesgo de que se revelara al público su actuación en Camerún.

Estrategia de intimidación

¿Habrá algo menos transparente que las operaciones productivas y comerciales, las redes de influencias o las actividades de represión de los grandes grupos empresariales? Mientras las críticas se limitaron a publicaciones relativamente marginales, el grupo no consideró necesario reaccionar. Pero cuando la radio francesa estatal, Radio France, retransmitió ciertas opiniones discordes, el grupo decidió que ya era suficiente y que debía “atacar” a su vez, para que “sirviera de ejemplo”, pues “con el grupo no se juega”, como bien dijo el Sr. Dominique Lafont, número dos de Bolloré S.A., durante el juicio a Collombat. Lo que sucede es que el grupo Bolloré se ha vuelto muy consciente de su imagen. “En África, Bolloré es una empresa ciudadana. [...] Nuestra estrategia consiste en sacar al continente de su aislamiento” por medio de un “desarrollo sostenible”, especificó el Sr. Lafont. En cuanto a las opiniones críticas, se las calificó de “miserabilistas y altermundialistas”.

Cabe señalar que, en Francia, Bolloré dispone de otros medios para influir en su favor sobre la opinión pública. En efecto, es el principal accionista del gigante de la publicidad Havas, sexto grupo de comunicación mundial y principal anunciante de numerosos medios de prensa. Además, Bolloré es propietario del canal Direct 8 y de dos diarios gratuitos, *Direct Soir* y *Direct Matin Plus*. Es evidente que sus lectores no se enterarán en absoluto de las críticas que reciben los negocios africanos de Vincent Bolloré, de la connivencia de los regímenes locales, de la aniquilación de la resistencia en las plantaciones, o de la destrucción vinculada con el oleoducto Chad-Camerún... No, para el público en general, toda la actividad de ese grupo (una de las más diversificadas del mercado) se resumirá en su fachada más presentable, la del Bluecar, un automóvil eléctrico previsto para 2011, principal baza con la que cuenta Bolloré para lograr el “reposicionamiento” ecológico de su imagen.

¿Quién es Bolloré?

El grupo Bolloré figura hoy entre los 500 más importantes del mundo, con un volumen de facturación anual de más de siete mil millones de euros. Se expandió principalmente en África, donde está presente en 42 países. Vincent Bolloré – 18º entre los más acaudalados de Francia en 2009 – construyó un imperio mucho más extenso que las antiguas colonias francesas. Se apoderó no sólo de plantaciones y servicios públicos africanos sino, sobre todo, de los puertos (su negocio tradicional en África) y la industria petrolera. El grupo no vaciló en trabajar en estrecha unión con diversos dictadores como Denis Sassou Nguesso, Omar Bongo o Charles Taylor. Además, Bolloré es amigo del presidente Nicolas Sarkozy: éste viajó en el yate del empresario luego de su victoria en la elección presidencial y dijo de él que hacía “honor a la economía francesa”.

Gracias a la compra de antiguas empresas coloniales y aprovechando la oleada de privatizaciones impuestas por los "ajustes estructurales" del FMI, Bolloré se ha convertido en un protagonista ineludible de la estructura económica y la vida política de muchos países africanos. Su control de sectores estratégicos y la transferencia de parte de sus ganancias africanas a paraísos fiscales como Luxemburgo o las islas anglonormandas le permiten disponer del capital financiero que necesita para sacar adelante sus negocios bursátiles y su estrategia expansionista.

Las plantaciones de Bolloré en Camerún

Camerún, ex colonia francesa, sigue estando administrado por una oligarquía que se ocupa más de sus propios intereses y de los de Francia que del interés general (según Transparency International, 2009, Camerún es el país más corrupto del África subsahariana). En ese contexto, muchos cameruneses consideran que el control de los sectores estratégicos por parte de grandes empresas francesas es una forma de neocolonialismo. No es raro ver a dirigentes del grupo Bolloré pavonearse en público con el presidente Paul Biya, su esposa Chantal o los principales funcionarios gubernamentales. Para Pius Njawé, director del diario Le Messenger, la ingerencia del grupo Bolloré en la vida política de Camerún es indudable: "es una suerte de Estado dentro del Estado. [...] un perfecto ejemplo de lo que se llama Franciáfrica".

En Camerún, el grupo Bolloré controla en particular inmensas plantaciones de palma aceitera y de caucho, ya sea directamente a través de Safacam (que explota 8.400 hectáreas), o indirectamente a través de Socfinal (que administra 31.000 hectáreas), junto con las dos familias del grupo Rivaud (retomado por Bolloré en 1995): los Fabri y los de Ribes. Bolloré posee cerca del 40% de las acciones de Socfinal, uno de los holdings de Rivaud que cotizan en la bolsa de Luxemburgo. Una de sus filiales, Intercultures, dirige Socapalm (Société Camerounaise de Palmeraies), la compañía implicada en los dos juicios anteriormente mencionados. En el balance de Socfinal, no menos del 45% de las ganancias provienen de Socapalm. Esta última es el resultado de un programa gubernamental iniciado en 1963 con ayuda del Banco Mundial. En 2000 fue privatizada y pasó a pertenecer al grupo.

Socapalm es una fuente de problemas sociales y ecológicos dramáticos, como fuera denunciado por el WRM (Boletines 112, 116 y 134 y Colección del WRM sobre plantaciones nº 13). Cuando pertenecía al Estado, confiscó sin indemnización tierras que eran propiedad consuetudinaria de las poblaciones locales; actualmente se sigue expandiendo en detrimento de los ecosistemas adyacentes, poniendo así en grave peligro la soberanía alimentaria de esas mismas poblaciones. Además, los productos agroquímicos empleados para el monocultivo y los desechos vertidos por su fábrica de Kienké contaminan masivamente los cursos de agua de la zona. En la plantación, las condiciones de vida y de trabajo son execrables: barracas y letrinas colectivas insalubres, falta de acceso regular al agua y electricidad, trabajos mayormente temporarios con salarios miserables, etc. Cientos de obreros trabajan seis días por semana, en algunos casos desde las 6 hasta las 18, sin cobertura social ni protección adecuada, por aproximadamente 1,6 euros por día, siempre y cuando los subcontratistas no olviden pagarles. Ante esta situación, ha habido múltiples huelgas y protestas, pero cuando surgió en 2007 un movimiento de resistencia contra tales prácticas su líder fue inmediatamente arrestado por la policía y las autoridades le hicieron saber que "si seguía lo iban a matar".

Las plantaciones de Bolloré en otras partes del mundo

El grupo Bolloré, a través de Socfinal, posee otras plantaciones de caucho y palma aceitera en África y Asia. Muchas de ellas originan problemas similares con los trabajadores y los pueblos vecinos. En Liberia por ejemplo, Socfinal es propietaria de la mayor plantación de caucho del país. En mayo de 2006, la Misión de Naciones Unidas (UNMIL) publicó un informe que describe la situación terrible que impera en dicha plantación en cuanto a derechos humanos: trabajo de niños menores de 14 años, recurso masivo a la subcontratación, uso de productos cancerígenos, sindicatos amordazados, despidos arbitrarios, mantenimiento del orden por milicias privadas, destierro de los campesinos que obstaculicen la expansión de la zona de explotación.

En Camboya, la situación no es mucho mejor (ver boletín nº 142 del WRM). Luego de vacilar durante meses, el gobierno otorgó una concesión para plantación de caucho a Socfin KCD, compañía que pertenece mayoritariamente a Socfinal. En diciembre del 2008, se hizo tan fuerte la tirantez que cientos de campesinos del grupo étnico *bunong* se juntaron para manifestar contra la compañía que ya había empezado a desbrozar la selva y los campos cercanos a los pueblos. Los manifestantes dañaron y quemaron entonces vehículos de la empresa en señal de protesta. Después del incidente, cerca de un millar de familias de siete comunidades vecinas declararon que la tierra les pertenecía, ya que la trabajaban desde hacía decenios, y que sus derechos colectivos, como autóctonos, estaban amparados por el Código de tierras. Esos campesinos acusaron también a las autoridades de favorecer a la compañía, mientras ella prometía empleos, hospitales, escuelas y casas. La situación no se ha pacificado aún.

Conclusión

El tema de los impactos sociales y ecológicos de los grandes grupos industriales se vuelve cada vez más impenetrable, conforme lo recalca el último informe de Reporteros Sin Fronteras titulado "*Deforestación y contaminación: investigaciones de alto riesgo*". La decisión del Tribunal de París de mayo de 2010 es un mal presagio para la libertad de prensa: va a desanimar a los periodistas – y a la sociedad civil en general – a emprender investigaciones críticas y alentará a las empresas a recurrir cada vez más a la vía judicial para acallar cualquier intento de poner en claro sus prácticas a menudo escandalosas. Junto con otros grandes grupos como Wilmar o Unilever, Bolloré apuesta al desarrollo de los agrocombustibles, supuestos sustitutos "ecológicos" del petróleo. ¿Sucederá que, cuanto más razones haya de investigar acerca de esas actividades, más se intentará intimidar a quienes pretendan hacerlo? En todo caso, lo cierto es que los industriales tendrán sumo interés en cortar de raíz las críticas e impedir que prosperen.

[inicio](#)

– Camerún: refutando diez mentiras sobre las plantaciones de Socapalm

Luego de que el industrial francés Vincent Bolloré presentara dos demandas contra Radio France, referentes en particular a las plantaciones de Socapalm (Société Camerounaise de Palmeraies), la fotógrafa Isabelle Alexandra Ricq y el investigador Julien-François Gerber refutan punto por punto las diez mentiras que suelen utilizar los defensores del empresario.

Radio France fue demandada por haber emitido dos programas que criticaban las plantaciones administradas por Socapalm. Esta empresa pertenece a Socfinal, de la cual Bolloré posee cerca del 40% [ver artículo sobre el tema en este mismo boletín]. ¿Es legítimo decir que las plantaciones de Socapalm traen prosperidad y desarrollo a las poblaciones locales? ¿Que el medio ambiente no se ha visto radicalmente degradado ni contaminado debido a Socapalm? ¿Es posible afirmar que los trabajadores exageran al decirse esclavos, cuando todos poseen antenas parabólicas?

En momentos en que el grupo Bolloré dirige su artillería contra los periodistas que critican en demasía sus actividades en África, este análisis demuestra con documentos fehacientes que los argumentos de la multinacional pueden ser rebatidos uno por uno.

El documento completo en francés se encuentra disponible en:
http://www.wrm.org.uy/countries/Cameroon/Dix_reponses.pdf

[inicio](#)

- Uruguay: nueva oportunidad para el necesario debate sobre el modelo foresto-celulósico

En los últimos años Uruguay fue conocido a nivel internacional por el extenso conflicto con Argentina provocado por los proyectos de instalación de dos mega-fábricas de celulosa, una de la empresa finlandesa Botnia y la otra de la empresa española Ence.

La historia se remonta al año 2002 cuando el gobierno, continuando con su política de promoción de la forestación con monocultivos de árboles a gran escala, comienza a alentar las inversiones extranjeras con destino a la fabricación de celulosa en nuestro país. A los beneficios que ya recibían las empresas forestadoras amparadas en la Ley Forestal de 1987 (subsidios, exoneraciones impositivas, créditos blandos, construcción de carreteras, mantenimiento de la caminería rural afectada por los pesados camiones de rolos, etc) se le sumó la redacción de Acuerdos de Protección de Inversiones y el otorgamiento de Zonas Francas donde instalar sus fábricas (libres de todo tributo creado o a crearse).

De esta forma la forestación con eucaliptos y pinos fue ocupando tierras de pradera, principal ecosistema de Uruguay, generando graves impactos sociales y ambientales (desplazamiento de población rural, impactos sobre el agua y el suelo, utilización de tierras aptas para ganadería y agricultura, impactos sobre flora y fauna, entre otros), los que hasta ahora no han sido estudiados seriamente por parte de los sucesivos gobiernos que han promovido este modelo forestal-celulósico. Esto llevó a un proceso de concentración de la tierra en manos de empresas

transnacionales: solo UPM-Botnia (Finlandia), Weyerhaeuser (Estados Unidos) y Montes del Plata (Suecia-Finlandia-Chile) son dueñas de 600.000 hectáreas.

La aprobación de las fábricas de Ence y Botnia sobre el río Uruguay, río compartido con Argentina, dio origen a un conflicto, una de cuyas expresiones más radicales fue el prolongado corte de ruta al puente internacional San Martín por parte de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú (que implicó la movilización de miles de ciudadanos argentinos). Esta medida llegó a involucrar al gobierno argentino en los reclamos contra la instalación de estos emprendimientos, quien al no llegar a un acuerdo con el gobierno uruguayo llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Con el tiempo Ence optó por re-localizarse más al sur sobre el Río de la Plata y tras la crisis financiera internacional vendió en 2009 sus activos a Montes del Plata (consorcio sueco-finlandés-chileno). A pesar de la gran oposición manifestada desde Argentina contra la instalación de la fábrica, Botnia igual siguió adelante con su proyecto y la fábrica comenzó a funcionar en noviembre del 2007.

Según un comunicado del grupo uruguayo Guayubira "a partir del corte del puente internacional, la conflictividad adquirió un nivel tal que se perdió el foco real de atención y de necesario debate. Pasamos de analizar si la instalación de una fábrica de estas características era beneficiosa o no para el país a un duro enfrentamiento uruguayos vs argentinos donde el nacionalismo exacerbado no dejó paso al análisis y quedó muy poco espacio para hacernos preguntas fundamentales para nuestro futuro como país, tales como: ¿fue bueno para Uruguay abrirse a una inversión extranjera como ésta, que implica seguir exportando materia prima y además en condiciones de zona franca? ¿Los beneficios recibidos justifican la mega-fábrica que hoy funciona en Fray Bentos y los cientos de miles de hectáreas de eucaliptos que hoy ocupan nuestros campos?"

Para Guayubira "este emprendimiento implica no solo el funcionamiento de una fábrica de celulosa de dimensiones nunca vistas en nuestro país hasta ahora --que según la propia empresa consume a diario 86 millones de litros de agua y utiliza 400 toneladas diarias de productos químicos-- sino además la utilización de miles de hectáreas de tierra destinadas a plantar monocultivos de eucaliptos a gran escala".

Además de todos los conflictos provocados por esta empresa transnacional hay que sumar que tras dos años de funcionamiento no se ven los beneficios prometidos. Guayubira recuerda que "las entrevistas y foros de presentación realizados por la empresa Botnia se centraron en publicitar los beneficios que significarían para el país y su gente si se aprobaba su instalación. Una de las principales promesas --buscando el apoyo social y político-- fue que generaría miles de puestos de trabajo". A dos años de funcionamiento de la fábrica, el departamento de Río Negro, donde está ubicada la fábrica de celulosa y uno de los más forestados de Uruguay, es el departamento con mayor desocupación del país y el que tiene los niveles más altos de violencia doméstica.

En marzo de 2010 José Mujica asume como presidente de los uruguayos y tiene varios encuentros con sus pares argentinos tratando de recomponer los vínculos; esto generó las

condiciones para que la Asamblea Ambiental de Gualaguaychú decidiera levantar el corte de ruta a cambio de un monitoreo compartido de la fábrica y de la calidad del agua del río Uruguay.

Es a partir de este gesto --y sin la presión de un conflicto internacional y con la fábrica de celulosa ya instalada-- que el Grupo Guayubira sale a la opinión pública a reclamar que "antes de seguir dando por hecho la instalación de nuevas y cada vez más grandes fábricas de celulosa nos detengamos a analizar si la primera y por ahora única fábrica que tenemos en nuestro país ha resultado beneficiosa para la vida de uruguayos y uruguayas, desde el punto de vista económico, social y ambiental".

Artículo basado en nota del Grupo Guayubira del 24 de junio del 2010, ver texto completo en: <http://www.guayubira.org.uy/celulosa/evaluemos.html>

[inicio](#)

- Chile: ingenieros forestales denuncian impactos de empresa certificada por CERTFOR y por FSC

Las plantaciones de Forestal Valdivia S.A., perteneciente al grupo ARAUCO, no solo cuentan con certificación CERTFOR Chile (avalada por el sello internacional PEFC), sino también con certificación FSC de Cadena de Custodia (SGS-COC-005376).

De acuerdo con lo que afirma la página de CERTFOR, "Este estándar permite a los poseedores de bosques [léase plantaciones] demostrar que el manejo que han aplicado cumple con los requerimientos de desempeño social, económico y ambiental que los stakeholders (partes interesadas) relevantes demandan". El sello FSC asegura a su vez "el manejo ambientalmente adecuado, socialmente beneficioso y económicamente viable de los bosques" [incluyendo plantaciones].

Lo anterior parecería implicar una doble garantía para aquellos consumidores conscientes, que desean asegurarse que los productos que compran no han resultado en impactos negativos sobre las personas o el ambiente. Sin embargo, una nota de prensa emitida recientemente por la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) de Chile, pone en cuestión la validez de tal conclusión.

En efecto, un equipo de profesionales de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo efectuó a partir del año 2008, una serie de vuelos sobre las cordilleras de Los Andes y de la Costa en la Región de Los Ríos y en el extremo norte de la Región de Los Lagos, con el objeto de evaluar el estado de conservación y la posible eliminación de áreas con bosques nativos.

La AIFBN informa que "A partir del análisis de esta información se agruparon los sectores que evidenciaron cortas ilegales, detectándose 23 acciones irregulares en diferentes predios, que

fueron denunciadas ante la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en julio del año pasado. Dicha instancia estatal respondió a la totalidad de las denuncias cursadas, en las que se ha verificado incumplimiento de la legislación vigente en materia forestal". Entre los principales infractores identificados en el estudio se encuentra la doblemente certificada Forestal Valdivia.

Consultado el Ingeniero Cristián Frene (quien figura como contacto de la nota de prensa a que hacemos referencia), opinó que "Si este monitoreo se repitiera en las regiones de más al norte (Bío Bío, Maule y Araucanía), te aseguro que el panorama sería bastante peor, pero lamentablemente nadie hace esta labor en esos territorios".

En lo relativo a la denuncia de las acciones de Forestal Valdivia en la comuna de Lanco, la nota de prensa de la AIFBN destaca que "los predios cosechados a tala rasa por la empresa aludida son parte de la montaña que provee de agua a 5 comunidades que están en la comuna de Lanco, donde se ven afectadas al menos 700 personas con la cosecha de plantaciones y posterior quema de vegetación NATIVA existente, con químicos de alta toxicidad". A ello se agrega que "en el sector norte de la montaña ... actualmente conviven 45 comunidades jurídicas mapuche con un total de 1.258 familias mapuche según datos del Censo 2002".

Tanto la constatación de la destrucción de bosque nativo como los graves impactos del manejo de las plantaciones por parte de la empresa llevó a la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo a denunciar ante la Corporación Nacional Forestal "los gravísimos incumplimientos ambientales de la empresa Forestal Valdivia, perteneciente al Grupo Arauco, en la localidad de Lanco, al norte de la región de Los Ríos".

La nota de prensa agrega que tales incumplimientos "implican además una falta absoluta de conciencia social, al no respetar las fuentes de agua de las comunidades mapuche de esta zona. Desde febrero de este año, la empresa envía a subcontratistas a quemar la vegetación NATIVA existente con químicos de alta toxicidad. Estos químicos, al ser aplicados sobre la vegetación, permanecen en el suelo y son movilizados por las lluvias hacia los cursos de agua, los cuales abastecen a cientos de familias de la localidad de Antilhue".

¿En que quedan entonces las garantías de CERTFOR en cuanto al cumplimiento de "los requerimientos de desempeño social, económico y ambiental" y las del FSC sobre el "manejo ambientalmente adecuado y socialmente beneficioso" de las plantaciones? Al menos en este caso la respuesta parece muy clara: en un gran engaño hacia el consumidor.

Artículo basado en "Una historia de no respeto a los bosques nativos y la ley forestal", mayo 2010. Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN). CONTACTO: Ingeniero Cristian Frene cristianfrene@bosquenativo.cl
<http://www.ecoportel.net/content/view/full/93312>

[inicio](#)

EUROPA GLOBAL Y TRATADOS DE "LIBRE" COMERCIO

- Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea en América Latina: un camino a la pérdida de soberanía y territorios

Un conjunto de organizaciones sociales latinoamericanas (1) se reunieron en Montevideo para analizar los Tratados de Libre Comercio (TLC) que la Unión Europea (UE) firmó en mayo con América Central, Colombia y Perú. Estos TLC no solamente constituyen una grave amenaza para la soberanía alimentaria de los pueblos, los bosques y los principales ecosistemas de la región, así como la pesca artesanal, sino que además agravarán el cambio climático. Las organizaciones alertaron que los países del MERCOSUR (2) corren los mismos riesgos tras la decisión de reiniciar sus negociaciones con la UE a fines de junio.

Estos TLC forman parte de la estrategia denominada "Europa Global", implementada por la UE desde 2006 para fortalecer a sus grandes corporaciones transnacionales en todo el mundo.

Los análisis sectoriales de los impactos de los TLC, demuestran que éstos han puesto en jaque la soberanía alimentaria y afectan la agricultura de pequeña escala, la pesca artesanal, los bosques y otros ecosistemas fundamentales, y agravarán la crisis climática. Estos acuerdos comerciales de la UE son tan o más peligrosos que los firmados por Estados Unidos con Colombia, Perú y Centroamérica, y tienen el mismo objetivo: profundizar la liberalización comercial sobre amplios sectores estratégicos de las economías latinoamericanas, en beneficio de las empresas europeas.

Algunos de los instrumentos presentes en estos TLC son la liberalización de las inversiones y del sector Servicios, la apertura del sector agrícola, la eliminación de las trabas a las exportaciones (tanto arancelarias como no arancelarias), el fortalecimiento de los Derechos de Propiedad Intelectual (patentes) y el libre acceso de proveedores europeos a las Compras Estatales.

Uno de los ejemplos mencionados en la reunión fue el caso de la reciente invasión de productos lácteos europeos en Colombia y las letales consecuencias que esto tuvo especialmente para los pequeños productores colombianos. La Unión Europea había exigido para el sector lácteo la liberalización total de aranceles para volúmenes altos de leche en polvo y quesos europeos. La nueva normativa rige también para Perú y países centroamericanos. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, la aceptación de esta disposición sería muy perjudicial para el sector "ya que actualmente tiene 'importación cero' de productos lácteos". (3)

"Estas medidas aumentarán la presencia de las grandes empresas en el sector agrícola. La agricultura industrializada, con gran maquinaria, uso de agrotóxicos, se verá fortalecida, sumando las patentes sobre las semillas, en detrimento de la agricultura familiar y campesina. Las políticas alimentarias controladas por el mercado internacional seguirán beneficiando empresas y perjudicando la soberanía alimentaria de los pueblos, sus posibilidades de determinar sus prácticas alimentarias locales y nacionales", aseguraron las agrupaciones sociales latinoamericanas presentes en el evento.

Señalaron asimismo que los TLC impulsados por la UE incrementarán el impulso en el Sur global de la actividad extractiva maderera, los agrocombustibles, el agronegocio y la ganadería extensiva, los monocultivos de árboles, que han arrasado con los bosques y otros ecosistemas importantes como las praderas y desplazado a comunidades locales, especialmente indígenas. La carrera europea por acceder a todo tipo de recursos naturales y adueñarse de la biodiversidad, sumada a esas actividades económicas realizadas desenfrenadamente, amenaza con acabar con los bosques restantes del continente.

Las organizaciones sociales agregaron que la pequeña pesca artesanal, fundamental para la soberanía alimentaria y la alimentación de las poblaciones, también corre riesgos. Las grandes empresas europeas ya ocupan posiciones dominantes en el sector pesquero y acuícola latinoamericano, controlando el negocio de especies como el camarón, el atún y la tilapia. Su pesca de arrastre absolutamente insustentable ya es grave hoy y las medidas comerciales que defiendan a las corporaciones de la pesca perjudican las posibilidades de los pequeños pescadores, que cada vez logran menores capturas.

Finalmente, las agrupaciones latinoamericanas señalaron que las condiciones impuestas por la UE en las negociaciones reforzarán la ya creciente implementación de las falsas soluciones al cambio climático en nuestros países: desarrollo de transgénicos, agrocombustibles, los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques en los países en desarrollo (REDD), así como las plantaciones de árboles para captura y almacenamiento de carbono y las represas. Estas medidas desvían la atención de lo verdaderamente necesario para hacer frente a la crisis del clima: que los países industrializados reduzcan radicalmente sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Estos acuerdos resultan incompatibles, además, con la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, porque no se realizaron las consultas previas a las comunidades indígenas. Así lo denunció la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), que agregó que los gobiernos de Colombia y Perú ni siquiera informaron nada a lo largo de todo el proceso de negociaciones.

“Los TLC que la UE impulsa en América Latina son una vuelta de tuerca más para la seguridad de sus empresas y del patrón de consumo abusivo de sus países. Los beneficiados en nuestra región son algunos pocos grupos de poder económico y los perjudicados nuestros pueblos. Los parlamentos centroamericanos, de Colombia y Perú, y el MERCOSUR todavía tienen la posibilidad de frenar este grave avance europeo contra nuestro futuro como pueblos soberanos”, destacaron las organizaciones presentes en Montevideo.

(1) El Grupo Semillas de Colombia, la Red Manglar de Ecuador, el Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas de Perú, CEPEDS de Brasil, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales y REDES-Amigos de la Tierra Uruguay

(2) El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en tanto que Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela son estados

asociados al bloque.

(3) Tomado de uno de los documentos elaborados por REDES para este evento.

Artículo realizado en base a información preparada por Redes - Amigos de la Tierra Uruguay, Los documentos pueden solicitarse a Jose Elosegui, correo electrónico: jelosegui@gmail.com

[inicio](#)

COMERCIO DE CARBONO

- ¿Para qué sirve el comercio de carbono?

Patrick Birley, Director Ejecutivo de European Climate Exchange (empresa líder en el comercio de carbono en Europa y a nivel internacional, sic de su página web), sabe un par de cosas sobre el comercio de carbono. O debería saber. Dice que alrededor del 95 por ciento de la comercialización de carbono del mundo se hace a través de su empresa. Por lo tanto, haríamos bien en escucharlo cuando habla sobre mercados de carbono.

Esto es lo que tiene para decir sobre el comercio de carbono: "No reduce ni en una sola tonelada del carbono liberado en la atmósfera. No tiene nada que ver con eso. Es una cuestión de topes. El sistema de topes es lo que produce, a largo plazo, una disminución de la cantidad de carbono liberado en la atmósfera."

El que habla no es un anarquista anti-mercado ni anti-globalización. Es el director de European Climate Exchange hablando en Irlanda en noviembre de 2009, durante un evento organizado por el Instituto de Asuntos Internacionales y Europeos. Pero si el comercio de carbono no reduce las emisiones de carbono, ¿para qué sirve entonces?

Desafortunadamente, sobre este punto la presentación de Birley fue un poco más vaga. "Hay gente que gana y otra que pierde dinero," explicó. Claro que él es uno de los que ganan. "Yo soy ciertamente una empresa con fines de lucro que apunta a generar las mayores ganancias posibles para sus accionistas, y eso no me avergüenza en absoluto."

Pero el comercio de carbono no se trata sólo de hacer dinero. Luego de repetir que su empresa no hace nada por reducir la cantidad de carbono liberado en la atmósfera, Birley dijo: "Estamos ayudando a aquellos que reducen su carbono a gestionar los riesgos asociados."

En una de las diapositivas de su presentación, titulada "¿Quién es el mercado?", Birley detalla cuatro grupos: administradores de fondos de alto riesgo, inversores, arbitrajistas y especuladores. ¿Alguien recuerda la crisis de los créditos subprime? ¿Acaso no fue disparada precisamente por esos fabricantes de ganancias que gestionan los riesgos de otra gente con dinero de otra gente?

A comienzos de este año entrevisté a [Jeff Horowitz](#), fundador de Avoided Deforestation Partners, una organización con sede en Estados Unidos, que trabaja para que las compensaciones de carbono forestal se incluyan en la legislación climática de ese país. Le pregunté a Horowitz por qué estaba a favor del comercio de créditos de carbono de los bosques, siendo que éstos no reducen las emisiones ni pueden hacerlo. En cinco largos párrafos, la única respuesta que dio a esta pregunta fue argumentar que "sin la capacidad de producir compensaciones REDD creíbles y ambientalmente de peso, los objetivos de reducción que los políticos podrían lograr disminuirían significativamente." Patrick Birley también espera que el comercio de carbono "haga que la industria esté dispuesta a aceptar una disminución mayor en cuanto a los topes."

Pero cuando observamos esos topes, encontramos poca o ninguna evidencia que respalde este argumento. Durante el fiasco de las negociaciones climáticas de la ONU en Copenhague a fines del año pasado, Estados Unidos y un puñado de países más presentaron al mundo el Acuerdo de Copenhague. Dicho Acuerdo menciona REDD, pero quienes lo escribieron tomaron el ya frágil límite del Protocolo de Kyoto y lo devolvieron tan lleno de agujeros que apenas se lo reconoce como un tope. Un análisis del Potsdam Institute for Climate Impact Research, publicado en abril en la revista *Nature*, [reveló](#) que: "Los actuales compromisos nacionales de reducción de emisiones que acompañan el Acuerdo de Copenhague no limitarán el calentamiento global a dos grados Celcius. De hecho, implican un aumento de la temperatura global media de más de tres grados Celcius en este siglo."

La industria contaminante es, al menos a veces, muy honesta acerca de sus motivos para apoyar el comercio de carbono. American Electric Power (AEP) es el mayor quemador de carbón de Estados Unidos. En 2008, Diane Fitzgerald, directora de medio ambiente y seguridad de AEP, explicó a la revista *Time*: "Compararemos las compensaciones forestales con proyectos como la energía renovable, y tendremos que tomar la mejor decisión financiera."

Un año después, Michael G. Morris, presidente de AEP, dijo al [Washington Post](#): "Cuando Greenpeace dice que la única razón por la cual American Electric Power quiere hacer esto es porque no quiere cerrar sus centrales a carbón, mi respuesta es, 'Por supuesto, porque nuestras centrales a carbón sirven a nuestros clientes de manera muy efectiva en cuanto a la relación costo-beneficio'." La industria quiere que haya comercio de carbono para no tener que reducir las emisiones. Al mismo tiempo, la industria contaminante puede aparentar que está haciendo algo cuando compra créditos de carbono.

Se espera que este comercio de una mercancía que nadie puede ver represente un mercado de 3 billones de dólares para 2020. Esto si el mercado no colapsa antes. El [fraude](#) de 7 mil millones de dólares destapado recientemente en la UE ilustra la posibilidad de que se involucre el crimen organizado. Comercializar carbono no reducirá las emisiones pero permitirá que la industria siga empleando tecnologías contaminantes.

Si se lograra reducir significativamente las emisiones, poner fin a la exploración en busca de nuevos combustibles fósiles, no construir nuevas centrales energéticas a carbón y realizar un cambio estructural hacia la producción de energía renovable, tal vez entonces el comercio de

carbono pasaría a ser una atracción secundaria, sin gran relevancia. Pero, tal como están las cosas, nada de eso está sucediendo, y el comercio de carbono permite a la industria seguir funcionando como de costumbre. Es para eso, y para ganar dinero, que sirve el comercio de carbono.

Chris Lang, <http://chrislang.org>

[inicio](#)
